



Asamblea General Consejo de Seguridad

Distr. general
8 de marzo de 2002
Español
Original: inglés

Asamblea General
Quincuagésimo sexto período de sesiones
Tema 51 del programa
**Informe del Tribunal Penal Internacional para el
enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio
y otras violaciones graves del derecho internacional
humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y de los
ciudadanos rwandeses presuntamente responsables de
genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas
en el territorio de Estados vecinos entre el 1º de enero y el
31 de diciembre de 1994**

Consejo de Seguridad
Quincuagésimo séptimo año

Cartas idénticas de fecha 4 de marzo de 2002 dirigidas al Presidente de la Asamblea General y al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General

Recordará usted que en mi carta de fecha 14 de septiembre de 2001 (A/56/265-S/2001/764) señalé a su atención y a la atención de los miembros de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad una carta de la Presidenta del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, la magistrada Navanethem Pillay, de fecha 9 de julio de 2001 (ibíd., anexo).

En el informe adjunto a esa carta, la Presidenta Pillay hacía una proyección de la manera en que era probable que se desarrollaran las actividades del Tribunal en lo relativo a los juicios, teniendo en cuenta la información que le había suministrado la Fiscal. La Presidenta llegaba a la conclusión de que, si el Tribunal mantenía su estructura, necesitaría mucho tiempo para llevar a término los juicios de todas las personas enjuiciadas entonces por él y de las que se preveía que lo fueran en el futuro. A fin de hacer frente a esta situación, la Presidenta Pillay y los demás magistrados del Tribunal Penal Internacional para Rwanda proponían que se ampliara la capacidad del Tribunal estableciendo un cuerpo de magistrados ad litem.

En una carta de fecha 6 de febrero de 2002 (véase el anexo), la Presidenta Pillay me comunicó que la Fiscal le había proporcionado hacía poco información revisada sobre su programa de investigaciones. Adjunto la carta de la Presidenta Pillay para su examen y el de los miembros de la Asamblea General.

En su carta, la Presidenta Pillay indica que la Fiscal le ha notificado que, tras examinar nuevamente su programa de investigaciones, ha reducido



considerablemente el número de nuevos acusados que prevé enjuiciar ante el Tribunal Internacional para Rwanda.

La Presidenta Pillay observa que, en consecuencia, deberán modificarse las proyecciones de las futuras actividades del Tribunal contenidas en el informe adjunto a su carta de fecha 9 de julio de 2001. También deberán introducirse las modificaciones correspondientes en el resumen adjunto a ese informe. Se adjunta a la carta de la Presidenta Pillay un resumen ejecutivo enmendado en que se han incorporado estas modificaciones.

Le agradecería que señalara la presente carta y sus anexos a la atención de los miembros de la Asamblea General.

(Firmado) Kofi A. **Annan**

Anexo

Carta de fecha 6 de febrero de 2002 dirigida al Secretario General por la Presidenta del Tribunal Penal Internacional para Rwanda

Hago referencia a nuestra propuesta de creación de un cuerpo de magistrados ad litem, presentada a usted el 9 de julio de 2001 (A/56/265-S/2001/764, anexo, apéndice), que actualmente está siendo examinada por el Consejo de Seguridad.

Nos preocupa que la demora en adoptar una decisión relativa a nuestra propuesta está afectando nuestro cronograma de enjuiciamientos del presente año. He celebrado conversaciones con la Fiscal, Sra. Carla Del Ponte, sobre las preocupaciones planteadas por el Consejo de Seguridad en relación con el futuro programa de investigaciones de la Fiscal y por las que la instaban a que revisara dicho programa. Posteriormente, en una carta de fecha 31 de enero de 2002, la Fiscal presentó un esbozo de su estrategia revisada para los enjuiciamientos. Al respecto, observo lo siguiente:

a) La Fiscal ha presentado una propuesta de enmienda al Reglamento de Procedimiento y Pruebas del Tribunal, a fin de que los sospechosos y acusados puedan ser trasladados para ser enjuiciados en jurisdicciones nacionales. Esos traslados aliviarán la carga de trabajo del Tribunal y acelerarán la finalización de su mandato. Presentaré dicha propuesta al próximo plenario;

b) La Fiscal ha indicado que su Oficina no realizará nuevas investigaciones después de 2003 y que todas las investigaciones habrán finalizado en 2004;

c) La Fiscal ha reducido de 136 a 111 el número de sospechosos y acusados que se están investigando.

La Fiscal destacó que, en relación con el número revisado de nuevas investigaciones (111), se aplican las mismas calificaciones que a las de la cifra anterior (136). En particular, manifestó que quizás no haya pruebas suficientes para respaldar las acusaciones “en un número significativo de casos” y que no se detendrá a todos los acusados. En consecuencia, es mi entendimiento que el número real de nuevos acusados será significativamente inferior a 111, pero que en este momento la Fiscal no está en condiciones de brindar más aclaraciones.

Tomando como punto de partida la cifra de 111, cabe recordar que en el párrafo 15 de la solicitud (párrafos 25 a 27 del anexo en que figuran estadísticas de apoyo) se señaló que la estimación de la Fiscal de 136 nuevos acusados y de aproximadamente 45 nuevos enjuiciamientos entrañaría la realización de 10 nuevos juicios todos los años, hasta 2005. Utilizando la misma cifra media de tres acusados por enjuiciamiento aplicada en la solicitud, para los 111 nuevos acusados sería necesario un número aproximado de 37 nuevos enjuiciamientos, una reducción de ocho.

En el párrafo 31 del anexo se indican tres posibles tasas de detención exitosa de nuevos acusados (100%, 75% y 50%). Como se mencionó precedentemente, es muy poco probable que se alcance una tasa de detención del 100%. Las nuevas estimaciones de la Fiscal brindan un fundamento para revisar las cifras originales, de la manera siguiente:

a) Si se realizara el 50% de las detenciones, se añadirían unos 55 acusados, o sea aproximadamente 19 nuevos enjuiciamientos. Ello entraña una reducción de cuatro enjuiciamientos (de 23 a 19);

b) Si se realizara el 75% de las detenciones, se añadirían unos 83 acusados, o sea aproximadamente 28 nuevos enjuiciamientos. Ello entraña una reducción de seis enjuiciamientos (de 34 a 28).

En el párrafo 32 del anexo se encara el número de mandatos necesario para concluir el enjuiciamiento de los 136 nuevos acusados con los recursos actuales. Utilizando las cifras revisadas, si se detuviera al 75% de los 111 nuevos acusados (83 personas), todavía serían necesarios tres nuevos mandatos después de 2007, aunque cabe presumir que los enjuiciamientos finalizarían en el curso del mandato. Si se detuviera al 50% de los acusados (55 personas), serían necesarios dos mandatos de cuatro años después de 2007 (2015).

En el párrafo 37 del anexo figuran las estimaciones después de la introducción de los magistrados ad litem. Sobre la base de que a comienzos de 2003 se aplicara plenamente la reforma, se puedan realizar las estimaciones siguientes:

a) Si se detuviera al 50% de los sospechosos de la estimación revisada de la Fiscal, los 19 enjuiciamientos se podrían completar a fines del tercer mandato (2007) o a comienzos del cuarto (2008);

b) Si se detuviera al 75% de los sospechosos de la estimación revisada de la Fiscal, los 28 nuevos enjuiciamientos podrían finalizar durante el cuarto mandato (2008-2009).

En consecuencia, la reducción hecha por la Fiscal en el número de nuevos acusados, de 136 a 111, tiene un efecto muy limitado en las posibles fechas de finalización de la labor del Tribunal. Sin embargo, las nuevas cifras ayudarán a que el Tribunal pueda completar su mandato en 2007 ó 2008.

Cabe destacar que, sin perjuicio del número de nuevos acusados que en realidad se traslade a Arusha, es indispensable que el Tribunal cuente con magistrados ad litem a fin de acelerar los enjuiciamientos contra los acusados que ya están detenidos en Arusha, algunos de los cuales ya han cumplido varios años de detención. Recientemente la Fiscal nos informó de que varios de esos casos podrán ser enjuiciados a la brevedad. Como se mencionó en la solicitud, las Salas de Primera Instancia tienen una capacidad muy limitada para comenzar los nuevos enjuiciamientos, habida cuenta de que están tramitando siete enjuiciamientos contra 17 acusados. Es necesario aplicar urgentemente la reforma de los magistrados ad litem a fin de que los enjuiciamientos puedan comenzar no bien la Fiscalía y la defensa estén en condiciones de actuar, y no tener que esperar meses hasta que una o todas las actuales Salas de Primera Instancia estén en condiciones de comenzar los nuevos casos.

Se acompaña adjunta una versión actualizada del resumen, que figura en el apéndice de mi carta de fecha 9 de julio de 2001 (véase el apéndice).

Respetuosamente solicito que estos nuevos hechos se pongan en conocimiento de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad para su examen.

(Firmado) Magistrada Navanthem **Pillay**
Presidenta

Apéndice

Resumen revisado del pedido de magistrados ad litem

Desde que se inició el primer proceso en 1997, las Salas de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Rwanda han dictado ocho sentencias en relación con nueve acusados. Se está tramitando un total de siete causas con 17 acusados. Por lo tanto, de las 54 personas que han comparecido hasta el momento ante el Tribunal (de las cuales 46 están detenidas en Arusha y seis están cumpliendo su condena en otras partes), 26 ya han recibido la sentencia o están siendo juzgadas. Con los recursos de que se dispone, las Salas de Primera Instancia no podrán conocer de todas las causas pendientes antes del período 2006-2007, cuando finaliza el tercer mandato del Tribunal.

La Fiscal ha dado a conocer a la Presidenta del Tribunal su futuro programa de investigaciones y posteriormente revisó la estrategia de los enjuiciamientos. Ello permite prever la fecha posible de finalización de los enjuiciamientos. La Fiscal prevé haber detenido para 2004 un máximo de 111 nuevos acusados, pero ha señalado que quizás no haya pruebas suficientes para respaldar el enjuiciamiento “en un número significativo de casos” y que no todos los acusados habrán de ser detenidos. En consecuencia, cabe esperar que el número de nuevos acusados sea bastante inferior a 111. Según el número real de acusaciones y detenciones, el Tribunal estará en condiciones de finalizar todos los juicios en primera instancia para 2015 (con una tasa de detenciones del 50%) o para 2018-2019 (75%) o 2020 (100%) con los recursos actuales. Dichos cronogramas no son aceptables.

En el actual proyecto de enmienda al Estatuto del Tribunal con respecto a los magistrados ad litem se sigue en gran medida la solución adoptada por el Consejo de Seguridad en su resolución 1329 (2000) para el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Sin embargo, se propone que los magistrados ad litem estén facultados también para dictar resoluciones, en las actuaciones preliminares y que una de las Salas de Primera Instancia pueda componerse únicamente de magistrados ad litem. Esto es importante para evitar retrasos.

Si se aplicara la reforma plenamente antes de que finalice 2002, el Tribunal podría llevar a término todas las causas contra los actualmente detenidos hacia fines de 2004. La fecha en que habrían de terminar los juicios contra los 111 acusados previstos dependería de la tasa de detenciones: 2007-2008 (50%), 2008-2009 (75%) y 2011 (100%).

El establecimiento de un cuerpo de magistrados ad litem es una solución más económica que continuar con sólo tres Salas de Primera Instancia hasta el siguiente decenio. Los magistrados prevén que, a fin de realizar economías, las salas funcionarían por turnos.